



HUMAN
RIGHTS
WATCH

BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD

Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial

HUMAN
RIGHTS
WATCH

Bajo su propia responsabilidad

Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial

Copyright © 2015 Human Rights Watch
Todos los derechos reservados.
Impreso en Estados Unidos de América
Diseño de portada por Rafael Jiménez

Human Rights Watch defiende los derechos de personas en todo el mundo. Investigamos exhaustivamente casos de abuso, exponemos ampliamente los hechos y exigimos a quienes están en el poder que respeten los derechos y garanticen medidas de justicia. Human Rights Watch es una organización internacional independiente cuya labor se inscribe en un movimiento dinámico por la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos para todos.

Human Rights Watch es una organización internacional con personal en más de 40 países, y oficinas en Ámsterdam, Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Goma, Johannesburgo, Londres, Los Ángeles, Moscú, Nairobi, Nueva York, París, San Francisco, Sídney, Tokio, Toronto, Túnez, Washington DC y Zúrich.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: <http://www.hrw.org/es>



Bajo su propia responsabilidad

Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial

Resumen	1
Recomendaciones clave	7
A las autoridades del Grupo del Banco Mundial	7
A la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman y el Panel de Inspección	7
A todos los países accionistas del Grupo del Banco Mundial	8
A gobiernos que reciben asistencia del Grupo del Banco Mundial	9

Resumen

En febrero de 2015, entre 40 y 50 residentes, en su mayoría mujeres de la localidad de Durgapur, una región al norte de la India, iniciaron una sentada, a modo de protesta, que se extendió durante más de un mes. La empresa estatal Tehri Hydro Development Corporation India Ltd. (THDC) estaba trabajando en un proyecto de energía hidroeléctrica cerca de su comunidad, y algunos pobladores creían que la red de túneles excavados para el proyecto ponía en riesgo sus viviendas y el bienestar general de la comunidad. Las mujeres y sus hijos organizaron una sentada de un día entero a modo de protesta, mientras entonaban cantos que expresaban su temor por el futuro, además de otras canciones sobre valentía y esperanza.

Sita (nombre ficticio), una mujer de 30 años que estaba entre las manifestantes, contó a Human Rights Watch que mientras duró la protesta, era habitual que ella y otros residentes fueran amenazados, intimidados e insultados por trabajadores y contratistas de THDC. Empleados de la empresa llamaron “prostitutas” a las mujeres, les profirieron insultos agraviantes sobre la casta a la cual pertenecen y les advirtieron sobre la posibilidad de “graves” consecuencias si persistían en su protesta.

Estas amenazas e insultos forman parte de un patrón más general de hostigamiento que ha sido descrito por Sita y otros miembros de la comunidad. Algunos residentes de zonas vecinas afectadas por el proyecto indican haber sufrido represalias tras objetar el modo en que se está implementando el emprendimiento de energía hidroeléctrica. Distintas comunidades del lugar afirman que el proyecto impide que las mujeres puedan realizar sus actividades habituales con libertad y sin temor. Cuando Human Rights Watch preguntó a THDC sobre estos señalamientos, la empresa respondió que no se habían producido violaciones de derechos humanos en la zona involucrada en el proyecto, que la seguridad de las mujeres ha sido considerada seriamente incluso desde la preparación del proyecto y que estaban analizando los incidentes planteados por Human Rights Watch “y adoptaría medidas pertinentes de ser necesario”.

Si bien la mayoría de los residentes de zonas afectadas por el proyecto han aceptado este emprendimiento, algunas pocas familias en la aldea Harsari siguen resistiéndose a ser reubicadas en otros sitios. Además de quienes repudian la excavación de un túnel en

Durgapur, gran cantidad de residentes de localidades cercanas se oponen al proyecto debido a consideraciones más generales sobre sostenibilidad ambiental. Estos detractores aseveran que enfrentan amenazas debido a su resistencia al proyecto.

El proyecto hidroeléctrico contra el cual se manifestaba Sita es financiado por el Banco Mundial. En teoría, la participación del Banco Mundial en un proyecto de este tipo debería ser una noticia auspiciosa para residentes de la comunidad, como Sita. Tanto el Banco Mundial (el organismo de préstamo al sector público del Grupo) como la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC) (el organismo de préstamo al sector privado del Grupo) cuentan con políticas que exigen consultar a las comunidades y evitar que tanto estas como el medioambiente sufran prejuicios como resultado de sus inversiones. THDC ha manifestado de manera expresa que ha cumplido con las políticas del Banco Mundial. El Grupo del Banco Mundial también cuenta con mecanismos diseñados específicamente para que los miembros de comunidades puedan tener una vía para plantear denuncias directamente ante delegaciones independientes del Grupo —el Panel de Inspección y la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman (CAO)— que se encargan de investigar e informar incumplimientos de estas políticas. Sin embargo, como se demuestra en este informe, a menudo en la práctica esto no significa demasiado cuando se producen ataques contra comunidades.

El informe describe evidencias de que personas en Camboya, la India, Uganda, Uzbekistán y otros sitios han sufrido represalias por parte de gobiernos y poderosas empresas, debido a haber manifestado críticas a proyectos financiados por el Banco Mundial y la IFC. Investigaciones realizadas por el mismo Banco Mundial desde hace tiempo han identificado correlaciones entre el alcance y la calidad de la participación pública en proyectos y el éxito de los proyectos de desarrollo. Sin embargo, el presente informe documenta que, en muchos casos, funcionarios del Banco Mundial y la IFC no respondieron de manera adecuada a abusos que hacen caso omiso de sus propios compromisos enunciados en materia de participación y rendición de cuentas.

En algunos ejemplos, el Grupo del Banco Mundial incluso no ha adoptado medidas adecuadas en casos en que personas sufrieron represalias específicamente debido a que plantearon consideraciones de derechos humanos a funcionarios del Grupo. En un caso, semanas después de que el Panel de Inspección del Banco Mundial concluyera su proceso, fuerzas de seguridad gubernamentales encarcelaron al intérprete designado por el Panel.

Las fuerzas de seguridad también confiscaron al menos una computadora que podría contener información sobre la identidad de personas que accedieron a hablar con el Panel de Inspección debido a que les aseguraron que se garantizaría la confidencialidad.

Funcionarios del Banco han señalado a Human Rights Watch que han interpelado a funcionarios gubernamentales en relación con la detención y planteado sus preocupaciones a puertas cerradas. Sin embargo, semanas después de la detención, el Banco extendió un nuevo préstamo al gobierno. Al momento de redacción de este documento, el intérprete continúa encarcelado en un centro de detención asociado con señalamientos de tortura. El Panel de Inspección ha realizado un seguimiento de la situación y, según señalaron algunos de sus miembros, ha solicitado a directivos del Banco que intercedan. No obstante, no ha adoptado medidas para verificar cómo se encuentran quienes fueron entrevistados como parte de su investigación, más allá de haber conversado sobre consideraciones de seguridad con representantes de reclamantes. En los últimos años, una cantidad cada vez mayor de países han emprendido campañas generalizadas e incluso temerarias que procuran impedir que haya espacio para actividades de la sociedad civil, y en algunos casos llegaron incluso a criminalizar el trabajo independiente en derechos humanos. Estas medidas abusivas pueden impedir que personas participen en decisiones relativas a desarrollo, se opongan públicamente a iniciativas que puedan menoscabar sus medios de subsistencia o vulnerar sus derechos, y denuncien iniciativas de desarrollo que son ineficaces, perniciosas o que han no han sido satisfactorias por otros motivos. Este informe demuestra que estas tendencias represivas más generales tienen un profundo impacto en proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial en países como Etiopía y Uzbekistán. No solo numerosos miembros de comunidades y activistas enfrentan un riesgo cada vez mayor de represalias por oponerse a proyectos financiados por el Grupo que reciben apoyo gubernamental, sino que además organizaciones independientes que podrían ayudar a las comunidades a articular sus inquietudes y perspectivas relativas a proyectos de desarrollo también enfrentan desafíos similares. El Grupo del Banco Mundial no ha adoptado medidas sustanciales destinadas a crear un entorno propicio para la participación y la rendición de cuentas al financiar proyectos en países que están cerrando o han ya cerrado los espacios para la sociedad civil, o que castigan sistemáticamente el disenso.

Las represalias pueden ser de distintas formas. El presente informe documenta casos en los cuales personas que se oponían a proyectos y miembros de comunidades afectadas

recibieron amenazas, tácticas intimidatorias e imputaciones penales infundadas. Algunas mujeres han sido objeto de acoso sexual o amenazas, agresiones o insultos por motivos de género cuando expresan su opinión, como Sita y otras manifestantes que fueron calificadas de “prostitutas”. También describe situaciones en las cuales miembros de las fuerzas de seguridad han respondido de manera violenta a protestas pacíficas, con agresiones físicas y detenciones arbitrarias contra miembros de las comunidades. En otros casos, detractores o familiares de estos han sido amenazados con la posibilidad de perder su empleo o medios de subsistencia. En numerosos países, estas represalias a menudo se producen en el marco de un esfuerzo más amplio para demonizar a críticos y calificarlos de antipatriotas y “antidesarrollo”.

El Grupo del Banco Mundial debería tener muy en claro la posibilidad de este tipo de represalias. El Panel de Inspección del Banco Mundial ha reconocido expresamente el riesgo de represalias e intimidación, en particular debido a que los reclamantes suelen ser personas de sectores marginados de bajos recursos, sin influencia en el proceso político. Estos riesgos no afectan solamente a quienes plantean reclamos ante el Panel de Inspección o la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman (CAO) de la IFC. También alcanzan a quienes critican diversos proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial, con independencia de cómo plantean estos cuestionamientos.

A pesar de los graves riesgos que asumen las personas que viven en comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco Mundial y la IFC al denunciar los problemas asociados que observan, o de los perjuicios que sufren, el Banco Mundial y la IFC no han adoptado suficientes medidas para garantizar un entorno seguro donde las personas puedan hablar libremente y sin temor a represalias. En contextos represivos, el Grupo del Banco Mundial con frecuencia ha intentado ignorar los riesgos de abuso en vez de entablar conversaciones difíciles con gobiernos socios.

El Banco Mundial debería transmitir categóricamente a los países miembros que las críticas a actividades financiadas por el Grupo del Banco Mundial son bienvenidas y se consideran un elemento importante para mejorar el impacto de las iniciativas de desarrollo, y que las represalias contra críticos o personas involucradas de otro modo en tales actividades serán repudiadas de manera pública y enérgica.

Anteriormente, el Grupo del Banco Mundial en ocasiones ha respondido con prontitud y de manera pública a algunos incidentes de represalias que tuvieron fuerte repercusión. El ex presidente del Grupo del Banco Mundial James Wolfensohn intercedió en las más altas esferas del gobierno, e informó públicamente sobre estas tratativas cuando un denunciante ante el Panel de Inspección y líder de oposición fue detenido en Chad en 2001. Un funcionario del Banco Mundial también se manifestó públicamente en contra de la violenta represión de manifestantes por el gobierno de Camboya en 2002, y remarcó que tales acciones se apartan de cualquier compromiso de participación y rendición de cuentas.

Si bien incluso entonces estos esfuerzos del Banco por responder a represalias fueron esporádicos, ahora parecen haber sido reemplazados, en el mejor de los casos, por conversaciones moderadas y a puertas cerradas de dudosa eficacia. En el peor de los casos, la respuesta más común parece haber sido una apatía absoluta.

El informe expone recomendaciones detalladas sobre medidas que permitirían al Grupo del Banco Mundial cumplir con las responsabilidades asumidas. El Banco Mundial y la IFC deberían adoptar todas las medidas necesarias para evitar represalias, incluso trabajar activamente para crear un entorno donde puedan plantearse críticas de manera segura. Deberían realizar un seguimiento atento para identificar represalias y, en caso de producirse, responder en forma oportuna, pública y enérgica, incluso exigiendo a los gobiernos que investiguen y juzguen a todos aquellos que usen la fuerza contra manifestantes o amenacen o agredan físicamente a críticos. Deberían, además, investigar de manera independiente presuntos abusos y ofrecer resarcimiento cuando los gobiernos se nieguen a hacerlo. Al igual que las Naciones Unidas, deberían asimismo informar de manera pública y periódica sobre represalias que se relacionen de cualquier modo con sus inversiones, así como las acciones realizadas en respuesta.

A pesar de ejemplos positivos de intervenciones del Banco en Chad y Camboya, el Grupo del Banco Mundial no ha desarrollado una práctica coherente para identificar represalias y actuar en consecuencia. Esto destaca la necesidad de que el presidente del Grupo del Banco Mundial Jim Yong Kim y la junta de directores ejecutivos establezcan un fuerte liderazgo, a fin de marcar la pauta para la organización y transmitir claramente que se espera que todo el personal trabaje de manera diligente para prevenir y responder a amenazas, actos de intimidación y cualquier otro tipo de represalias vinculadas con las actividades del Grupo.

El presidente Kim debería asumir un rol de liderazgo facilitando un entorno favorable donde las personas puedan transmitir libremente su posición con respecto a las inversiones del Grupo, sin temor a represalias, en consonancia con los compromisos de participación y rendición de cuentas del Grupo.

Recomendaciones clave

A las autoridades del Grupo del Banco Mundial

- Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir represalias contra organizaciones de la sociedad civil, miembros de comunidades afectadas u otros actores por participar en la formulación de proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial, criticarlos o intentar expresar opiniones y consideraciones al respecto. Las acciones realizadas en este sentido deberían incluir consultas habituales y directas con comunidades afectadas para determinar sus necesidades de protección, y trabajar con actores gubernamentales y empresas que reciben fondos para asegurar que tal protección se preste y se respete efectivamente.
- Asegurar que la interacción con todos los actores relevantes en proyectos de desarrollo se lleve a cabo de buena fe, y no sea una mera formalidad. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, en particular, que las personas o los grupos afectados que tradicionalmente están marginados o excluidos de procesos de decisión — como mujeres, pueblos indígenas, minorías sexuales y de género, y personas con discapacidad— puedan participar de manera activa, genuina y segura en procesos de decisión con implicancias para ellos, sin riesgo de sufrir represalias.
- Responder enérgicamente a todas las instancias de represalias, incluso denunciándolas públicamente e intercediendo en casos concretos para instar a gobiernos y empresas a abstenerse de participar en graves abusos.

A la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman y el Panel de Inspección

- Analizar el riesgo de represalias y otros potenciales riesgos para la seguridad que enfrentan los denunciantes y otros actores cada vez que se recibe una denuncia. En estrecha coordinación con los denunciantes, definir un proceso que aborde en forma total las consideraciones sobre seguridad. Reconsiderar este proceso en todas las etapas de rendición de cuentas, a fin de abordar riesgos emergentes.
- Deliberar con la oficina nacional del Banco Mundial, desde el inicio y durante la totalidad del proceso de rendición de cuentas, todas las consideraciones de

seguridad y riesgos de represalias y, cuando sea pertinente, apoyar a la oficina nacional en las medidas de seguridad acordadas.

- Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que, cuando los denunciantes soliciten que no se divulgue su identidad, esta exigencia se cumpla y se mantenga durante todo el proceso.
- Brindar capacitación a personal que trabaja con denuncias de comunidades que permita identificar represalias y actuar adecuadamente para abordarlas, incluidas amenazas y represalias motivadas en aspectos de género o que afectan a otros grupos marginados.
- Realizar un seguimiento activo para identificar represalias durante el proceso de rendición de cuentas y con posterioridad, incluso manteniendo el contacto con demandantes para determinar si están expuestos a riesgos de seguridad o potenciales represalias, especialmente luego de visitas de la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman (CAO) o el Panel de Inspección.
- Si la CAO o el Panel de Inspección recibe información sobre represalias o riesgos para la seguridad, informar inmediatamente sobre esto a altos funcionarios del Grupo del Banco Mundial y, si corresponde, a altos funcionarios del gobierno y ejecutivos de las empresas implicadas, y trabajar con ellos para asegurar que se restablezca y se mantenga la seguridad de los denunciantes y otras personas.

A todos los países accionistas del Grupo del Banco Mundial

- Exhortar al Grupo del Banco Mundial a implementar recomendaciones contenidas en este informe, y responder de manera genuina y efectiva a las represalias que se produzcan.
- Asegurar que los compromisos de derechos humanos asumidos por los gobiernos, en particular vinculados con defensores de derechos humanos, sean reiterados por representantes en el Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial, y orienten las decisiones de estos representantes y sus comunicaciones con autoridades del Grupo del Banco Mundial relacionadas con represalias.

A gobiernos que reciben asistencia del Grupo del Banco Mundial

- Detener e impedir los ataques o la estigmatización contra personas, grupos y comunidades que critiquen o formulen consideraciones sobre desarrollo.
- Respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, permitiendo que los afectados por iniciativas de desarrollo y por la sociedad civil manifiesten consternación y malestar.
- Impedir y abstenerse de todo tipo de actos de represalia contra quienes traten o procuren tratar con el Grupo del Banco Mundial, incluso con el Panel de Inspección y la CAO.
- Dotar de recursos y capacitar adecuadamente a funcionarios de aplicación de la ley, a fin de que respeten el derecho de libertad de reunión y recurran únicamente a un uso justificable y proporcionado de la fuerza, cuando sea necesario.
- Investigar de manera imparcial, oportuna y exhaustiva todos los señalamientos de represalias, juzgar a los agresores y asegurar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos.
- Implementar las recomendaciones formuladas por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas en su informe del 1 de septiembre de 2014, y por la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos en su informe del 5 de agosto de 2013 sobre desarrollos a gran escala y defensores de derechos humanos.



El Banco Mundial ha destacado tradicionalmente la importancia de la participación pública y la rendición de cuentas en sus iniciativas de desarrollo. Sin embargo, en reiteradas ocasiones el Banco no ha abordado situaciones de intimidación o persecución de personas que critican proyectos financiados por la institución, y esto podría restar seriedad a sus compromisos declarados.

Bajo su propia responsabilidad describe evidencias de que personas en Camboya, la India, Uganda, Uzbekistán y otros sitios han sufrido represalias por parte de gobiernos y poderosas empresas, debido a haber manifestado críticas a actividades financiadas por el Banco Mundial y su organismo de préstamo al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC). A partir mayormente de entrevistas con activistas, víctimas de abuso y familiares de estas, el informe documenta ejemplos en los cuales el Banco Mundial y la CFI no lograron garantizar un entorno seguro en el cual las personas puedan expresar inquietudes o críticas sobre proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial, sin riesgo de sufrir represalias. En vez de ello, numerosos miembros de comunidades en estos países han asumido considerables riesgos al hablar abiertamente sobre los problemas que advierten en relación con estos proyectos, y han sido objeto de amenazas, acusaciones penales infundadas y violentas acciones represivas. El Grupo del Banco Mundial, en general, no ha intervenido para evitar que esto sucediera a sus detractores, y ha optado por hacer caso omiso de la situación en vez de entablar diálogos difíciles con los gobiernos.

Human Rights Watch insta al Grupo del Banco Mundial a transmitir de manera categórica a sus gobiernos socios que las críticas a actividades financiadas por el Grupo del Banco Mundial no solo deberían ser bienvenidas, sino además considerarse un elemento importante para mejorar las iniciativas de desarrollo. Debería adoptar todas las medidas necesarias para prevenir actos de intimidación contra críticos, realizar un seguimiento atento para identificar represalias y, en caso de que estas se produzcan, responder en forma oportuna, pública y enérgica.

(arriba) Una activista sostiene una pancarta durante una marcha de protesta en Cancún, México, contra la participación del Banco Mundial en el financiamiento de iniciativas climáticas en diciembre de 2010.

© 2010 Reuters

(portada) Miembros de la comunidad del lago Boeung Kak en Camboya protestan ante un cordón policial en diciembre de 2012, durante la segunda jornada del juicio a la activista comunitaria Yorm Bopha, inculpada de acusaciones falsas, cargos que presuntamente obedecen a una represalia por haberse expresado contra los desalojos forzados vinculados a un proyecto financiado por el Banco Mundial.

© 2012 John Vink